A. M. Delfino y Cía., apelando de una multa impuesta por la Prefectura Marítima, por infracción al artículo 117 del Reglamento del Puerto de la Capital.

Sumario: 1º Una resolución de un Juez Federal de la Capital conociendo de una multa impuesta por la Prefectura General de Puertos, en virtud de lo dispuesto en el inciso 6º del artículo 3º de la ley 3445, tiene carácter de definitiva a los fines del recurso extraordinario del art. 14, ley 48; y habiéndose sostenido ante el Juez Federal que el art. 117 del decreto de fecha 31 de Julio de 1908 es inconstitucional por hallarse en pugna con los artículos 18 y 67, inciso 11 12 y 28 de la Constitución, procede dicho recurso contra la resolución favorable a la validez de la disposición reglamentaria objetada.

2º Hay delegación de facultades cuando una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona, descargándolo sobre ella y no puede decirse que en el caso de autos, el Congreso por medio de la ley 3445 haya puesto en manos del Poder Ejecutivo todos o algunos de los poderes legislativos que la Carta fundamental le atribuye en los incisos 11 y 12 del artículo 67.

3º Atentos los términos en que se encuentra concebido el art. 3º de la ley 3445, no es posible desconocer que el Con-

greso ha legislado la materia relativa al buen mantenimiento de las condiciones sanitarias del puerto de la Capital, a su limpieza y cuidado, y al orden de la navegación, y el hecho previsto y prohibido por el art. 43 del Reglamento del Poder Ejecutivo, de fecha 31 de Julio de 1908, reviste el carácter de una contravención de policía comprendida dentro de los fines generales de la ley 3445 y del precepto particular del inciso 7º del art. 3º de la misma, constituyendo por su contenido el ejercicio legítimo de la facultad de reglamentar, atribuida al Poder Ejecutivo por el art. 86, inciso 2º de la Constitución.

Caso: Lo explican las piezas siguientes:

RESOLUCION DE LA PREFECTURA MARITIMA

Buenos Aires. Abril 25 de 1924.

Vistas estas actuaciones y resultando:

Estar debidamente comprobada en autos la infracción al artículo 43 del Reglamento del Puerto de la Capital, cometida por el capitán del vapor alemán «Bayen», en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de que ilustran estos obrados, se resuelve:

Aplicar al capitán de la referida embarcación una multa de cincuenta pesos moneda nacional por la infracción cometida, de acuerdo con la que establece el art. 117 del citado reglamento.

José Brilon.

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA

SENTENCIA DEL JUEZ FEDERAL

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1924.

Autos y Vistos:

Que como lo tiene resuelto la Prefectura Marítima a fs. 5 vuelta, está comprobado en autos con la declaración de los testigos Tomás Juárez y Félix Pedernera, que de a bordo del vapor alemán «Bayen», surto en el dique 3, el día 9 de Abril del corriente año, a las nueve y cuarenta y cinco, se arrojaba por un inborno residuos de comida al muelle y al agua, contraviniendo lo establecido en el art. 43 del Reglamento del Puerto de la Capital,

Por ello se confirma la resolución dictada por la Prefectura Marítima en la que se impone al capitán del «Bayen» una multa de cincuenta pesos, en virtud de la autoridad que tiene para juzgar faltas y contravenciones policiales, atento lo dispuesto en el inciso 6 del art. 3 de la ley 3445.

Miguel L. Jantús.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA (1)

Buenos Aires, Junio 20 de 1927.

Autos y Vistos:

Considerando acerca de la procedencia del recurso extraordinario:

Que de la disposición contenida en el art. 3º, inciso 6º de la ley N° 3445, combinada con las del título II, libro IV del Código de Procedimientos Criminales, se infiere claramente que la resolución dictada por el señor Juez Federal conociendo de una

multa impuesta al recurrente por la Prefectura General de Puertos, es la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la ley N° 48 para la procedencia del recurso extraordinario.

Que, por otra parte, se ha sostenido ante el Juez Federal que el art. 117 del decreto de fecha 31 de Julio de 1908, es inconstitucional por hallarse en pugna con los artículos 18 y 67, incisos 11, 12 y 28, de la Constitución, y la resolución recaída ha sido en el sentido de reconocer validez a la disposición reglamentaria objetada, circunstancia esta última que unida a la anterior, coloca el caso a los efectos del recurso extraordinario dentro de lo dispuesto por los incisos 1° y 3° del art. 14 de la ley N° 48.

En su mérito, oído el señor Procurador General, se declara bien concedido el recurso,

Y Considerando en cuanto al fondo de la cuestión:

Que la Prefectura General de Puertos impuso a los agentes del vapor alemán «Bayen» una multa de cincuenta pesos por haber violado el art. 43 del Reglamento del Puerto de la Capital de fecha 31 de Julio de 1908, en consonancia con lo establecido por el art. 117.

Que los artículos 43 y 117 del susodicho reglamento se hallan concebidos en los términos siguientes: «Es prohibido a los buques arrojar al agua o a tierra en el interior del puerto objeto alguno, sea cual fuere su especie, peso, dimensiones o calidad», dice el art. 43, y el 117 castiga con una multa de cincuenta pesos la infracción a la prohibición contenida en el primero.

Que el apelante ha sostenido que los artículos 43 y 117 del decreto aludido son inconstitucionales y constituyen una delegación de facultades legislativas, porque el Poder Ejecutivo carece de atribuciones para crear sanciones penales de un presunto poder de policía que la Constitución ha puesto exclusivamente en manos del Poder Legislativo, y que el primero no ha podido

atribuirse sin violar el art. 18 de la misma y los incisos 11, 12 y 28 del art. 67 y 2º del art. 86º de la carta fundamental.

Que, la ley N° 3445 sancionada el 20 de Octubre de 1896, ha puesto la policía de los mares, ríos, canales y puertos sometidos a la jurisdicción nacional a cargo exclusivo de la Prefectura General de Puertos y de las subprefecturas y ayudantías que se creen, estableciendo en el art. 3º que mientras no sea sancionado el Código de Policía Fluvial y Marítima, serán atribuciones y deberes de aquéllas: «vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades sanitarias; cuidar de la limpieza de los puertos donde no existan dichas autoridades y remover los obstáculos accidentales que entorpezcan la navegación y juzgar las faltas o contravenciones a las ordenanzas policiales cuando la persona no exceda de un mes de arresto o de cien pesos de multa debiendo proceder de acuerdo con lo dispuesto en el título II, libro IV del Código de Procedimientos Criminales, resolución que será apelable para ante el juez de sección inmediato.» Inciso 6º artículo 3º.

Que, ciertamente, el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la administración, ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente conferidos. Es ese un principio uniformemente admitido como esencial para el mantenimiento e integridad del sistema de gobierno adoptado por la Constitución y proclamado enfáticamente por ésta en el art. 29. Willoughby, pág. 1317. Cooley C. L. 7ª edición, pág. 163.

Que, ello no obstante, ni la ley 3445, en la parte objetada, ni los artículos 43 y 117 del Reglamento, son incompatibles con el mencionado principio. Desde luego, no existe propiamente delegación sino cuando una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona descargándolo sobre ella. No puede decirse que en el caso de autos el Congreso por medio de la ley 3445 haya puesto en manos del Poder Ejecutivo todos o algunos de los pode-

res legislativos que la carta fundamental le atribuye en los incisos 11 y 12 del art. 67. Existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido aún en aquellos países en que, como los Estados Unidos de América, el poder reglamentario del Poder Ejecutivo se halla fuera de la letra de la Constitución. No ha sido definitivamente trazada, dice Marshall, la línea que separa los importantes asuntos que deben ser regulados por la legislatura misma de aquellos de menor interés acerca de los cuales una provisión general puede ser hecha, dando facultad o poder a los que deben cumplirlos bajo tal general provisión para encontrar los detalles. La diferencia entre los departamentos es ciertamente la de que la legislatura hace la ley, el Ejecutivo la ejecuta y el Poder Judicial la interpreta, pero quien hace la ley puede cometer algo a la discreción de los otros departamentos y el límite preciso de este poder es materia de delicada investigación. 10, *Weaton* 1, 43.

Que la doctrina contenida en estas palabras del gran juez americano es particularmente exacta dentro de los principios consagrados sobre la materia por la Constitución argentina. Esta, en efecto, confiere el poder de reglamentación, tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo. Al primero se lo atribuye de dos modos distintos: a) en relación a objetos ciertos y determinados, reglamentar un Banco Nacional (inc. 5º, art. 67), reglamentar el comercio marítimo (inc. 12, art. 67), establecer reglamentos para las presas (inc. 22), formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de los ejércitos (inc. 23), o se lo concede de un modo general e indeterminado «para hacer todos los reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes» (inc. 28, art. 67). A su turno el inciso 2º del art. 86, autoriza al Poder Ejecutivo para expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

Que esta facultad o poder de reglamentación conferido al Poder Ejecutivo por el inciso 2º del art. 86 de la Constitución en presencia de una ley y la reconocida al Poder Legislativo en el art. 67, son de idéntica naturaleza en el sentido de que ambos pueden comprender y se refieren a disposiciones de un orden semejante o igual, aunque el contenido y la extensión no reconozcan limitación alguna cuando el poder se ejercita por el Congreso

Que si el poder de reglamentación, sea que lo ejercite el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, designa una determinada facultad específica comprensiva de todas aquellas modalidades de interés secundario o de detalle indispensable para la mejor ejecución de la voluntad legislativa, y si tal poder pertenece tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo por disposición expresa de la carta fundamental, es evidente, que es una mera circunstancia de hecho, lo que define en cada caso concreto la extensión del poder reglamentario del Poder Ejecutivo, ya que es incontestable que cuando el Congreso ha agotado la reglamentación en mira de la más perfecta ejecución de la ley, el Poder Ejecutivo no tendría materia o substancia sobre la cual hacer efectiva la que al mismo título le corresponde. El raciocinio es también verdadero cuando, como en el caso *sub judice*, el Poder Legislativo lejos de apurar la reglamentación se ha limitado a señalar de un modo general la voluntad legislativa.

Que las observaciones precedentes autorizan a formular la conclusión de que cuando el Poder Ejecutivo es llamado a ejercitar sus poderes reglamentarios en presencia de una ley que ha menester de ellos, lo hace no en virtud de una delegación de atribuciones legislativas, sino a título de una facultad propia consagrada por el art. 86, inc. 2º de la Constitución, y cuya mayor o menor extensión quedará determinada por el uso que de la misma facultad haya hecho el Poder Legislativo. Habría una especie de autorización legal implícita dejada a la discreción del Poder Ejecutivo sin más limitación que la de no alterar el conte-

nido de la sanción legislativa con excepciones reglamentarias, pues, como es obvio, el Poder Ejecutivo no podría ir más allá de donde llega la intención de aquella ni crear la ley, ni modificarla.

Que la Corte Suprema de los Estados Unidos, interpretando preceptos muchos más restringidos que los nuestros, pues aquella Constitución no atribuye expresamente al Poder Ejecutivo facultades reglamentarias, ha podido decir con todo acierto: «negar al Congreso el derecho de delegar el poder para determinar algún hecho o estado de cosas de las cuales depende la fuerza de sus sanciones, sería parar la máquina del gobierno y producir confusión sino parálisis en el campo de las necesidades públicas». 204 U. S. pág. 364.

Que atentos los términos en que se encuentra concebido el art. 3 de la ley 3445, no es posible desconocer que el Congreso ha legislado la materia relativa al buen mantenimiento de las condiciones sanitarias del puerto de la Capital, a su limpieza y cuidado y al orden de la navegación.

Que para cumplir la voluntad legislativa expresada en esa ley sólo de un modo general el Poder Ejecutivo se hallaba constitucionalmente facultado para dictar ordenanzas y reglamentos especificando y definiendo las circunstancias particulares o los hechos o conjunto de hechos, mediante los cuales se hacían efectivos los poderes de policía conferidos y cuyo detalle aquélla no había reglado, normas y reglamentos tan obligatorios para los habitantes como si sus disposiciones se encontraran insertas en la propia ley, siempre que ellas se mantuvieran dentro de las limitaciones señaladas por el inc. 2º del art. 86.

Que el hecho previsto y prohibido por el art. 43 del Reglamento del Poder Ejecutivo, de fecha 31 de Julio de 1908, reviste el carácter de una contravención de policía comprendido dentro de los fines generales de la ley Nº 3445 y del precepto particular del inc. 7 del art. 3º de la misma. Constituye por su contenido el ejercicio legítimo de la facultad de reglamentar atri-

buida al Poder Ejecutivo por el art. 86, inc. 2 de la Constitución.

Que la cuestión de saber si el Poder Ejecutivo tiene facultades para crear por medio de su poder reglamentario sanciones punitivas constituidas por el arresto o la multa, no existe en la hipótesis, desde que la propia ley 3445 en su art. 3º, inc. 6º, ha atribuido expresamente a aquél el derecho de aplicar multas dentro del máximo que la misma señala y la impeusta en el caso, al recurrente, manifiestamente se halla dentro de lo autorizado por aquélla.

Que la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución en cuanto por ella se exige para la validez de una sanción de carácter penal la existencia de una ley anterior que prevea y castigue el caso traído a la decisión judicial, ha sido observada en el caso. Demostrado como queda, en efecto, la legalidad de los artículos 43 y 117 del reglamento dictado por el Poder Ejecutivo el 31 de Julio de 1908, en consecuencia de la ley Nº 3445, es evidente que la prohibición y la pena contenida en ellos era tan obligatoria para los habitantes como la ley misma, siendo además de observar que la infracción fué cometida después de encontrarse en vigor, el susodicho reglamento.

En mérito de estas consideraciones, se confirma la sentencia pronunciada por el señor Juez Federal en la parte que ha podido ser materia del recurso. Notifíquese y devuélvanse, repeniéndose el papel en el juzgado de origen.

A. BERMEJO. — ROBERTO REPETTO
— M. LAURENCENA.

(1) Con fecha veintidós se dictó igual resolución en el juicio seguido entre las mismas partes, por idéntica causa.